Caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia

OBSERVACIONES FINALES ESCRITAS

I. INTRODUCCIÓN

1. El caso Carvajal y otros vs. Colombia ofrece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) una oportunidad para examinar en profundidad el contenido y alcance de las obligaciones estatales en relación con el asesinato de periodistas por razones vinculadas a su oficio, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana” o “Convención”), y en particular, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión protegido por el artículo 13 de dicho tratado.
2. Los hechos del caso fueron establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión”, o “CIDH”) en su informe de fondo adoptado el 26 de marzo de 2015. Estos hechos se relacionan con el asesinato el 16 de abril de 1998 del periodista radial Nelson Carvajal Carvajal en la localidad de Pitalito, Colombia y la falta de una investigación diligente, completa y oportuna sobre lo sucedido. El asesinato del periodista Nelson Carvajal se enmarca en el contexto de la violencia letal contra periodistas en Colombia, y la impunidad que prevalece sobre estos crímenes.
3. Como ha expresado la CIDH en reiteradas oportunidades, el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema. El ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de todas las personas a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo¹.
4. La impunidad de estos delitos fomenta la reiteración de actos violentos y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras. En efecto, la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias devastadoras para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves². En este sentido, la Corte Interamericana en su sentencia dictada en el caso *Vélez Restrepo vs. Colombia* afirmó que la impunidad en este tipo de casos genera “el temor razonable de que este tipo de violaciones a los derechos humanos se repitan, lo cual podría tener como consecuencia que autocensuren su trabajo, por ejemplo en cuanto el tipo de noticia que cubren, en la forma de obtener la información y en la decisión sobre su difusión”³. Por ello, en este tipo de casos la Convención Americana exige la adopción de medidas positivas encaminadas a asegurar la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, castigo de quienes resulten responsables, y así evitar la impunidad y los efectos perjudiciales a la libertad de expresión que ésta genera.

¹ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

² CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

³ Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. párr. 212.

5. En ocasión de estas observaciones finales escritas, la Comisión profundizará sobre algunos de los aspectos más relevantes del caso, en particular aquellos que fueron objeto de discusión y preguntas por parte de los Honorables Jueces durante la audiencia pública, sin pretender reiterar todos los puntos y argumentos abordados en el informe de fondo. En tal sentido, la CIDH profundizará sobre: 1) el problema de la violencia contra periodistas y la cuestión de la impunidad en las Américas, y en Colombia, en particular, 2) el contenido específico de las obligaciones en relación con la violencia contra periodistas, derivado de su conexión con el derecho a la libertad de expresión, y 3) el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado colombiano en este caso. Adicionalmente, se presentan aclaraciones sobre la duración del trámite del presente caso ante la Comisión.

II. CONTEXTO: LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y SU IMPUNIDAD

6. Como expresó la Comisión en la conclusión de la audiencia pública, el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal es emblemático de la violencia letal contra periodistas en Colombia y la impunidad que rodea este tipo de casos en el país. Asimismo, es ejemplo de la violencia que todavía se ejerce contra periodistas en las Américas, una región ha experimentado un alarmante aumento de asesinatos de periodistas, que afecta de manera desproporcionada a periodistas que laboran en zonas rurales o regiones al interior del país y cubren noticias locales sobre corrupción, seguridad pública y delincuencia organizada. La impunidad de estos crímenes sigue siendo generalizada y los autores intelectuales no son identificados ni llevados a juicio.
7. En atención a este contexto, la CIDH invita a la Corte que, además de proveer justicia en el caso específico, desarrolle importante jurisprudencia en esta materia, acorde con el orden público interamericano, que pueda ser aplicable a otros casos por el propio sistema interamericano de derechos humanos y por las autoridades nacionales en la región.

a. Los asesinatos de periodistas en Colombia y su impunidad

8. La violencia letal contra periodistas en Colombia ha sido objeto de especial preocupación por parte de la CIDH⁴. A comienzos de la década pasada, Colombia llegó ubicarse entre los países del mundo con más periodistas asesinados. Si bien en el transcurso de los años el número de asesinatos ha disminuido, la gran mayoría de los casos permanecen sin solución, y los responsables siguen impunes⁵. En el informe *Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia*, publicado por la Relatoría Especial en 2005, se observó la particular vulnerabilidad de los periodistas de las regiones y el cuadro persistente de impunidad respecto de los asesinatos de periodistas ocurridos en Colombia en el período 1998-2005. Al respecto, el informe observó con preocupación que “la mayoría de los asesinatos ocurridos en Colombia continúan impunes” y enfatizó que “el efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad”⁶.

⁴ CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. [Capítulo VIII](#) (El derecho a la libertad de pensamiento). OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia](#). OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 25 de agosto de 2005; CIDH. Verdad, justicia y reparación: [Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia](#). Capítulo 6. Grupos especialmente afectados en el contexto del conflicto armado. Sección E. Periodistas y comunicadores sociales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 diciembre 2013. Párrs. 374-400.

⁵ CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. [Capítulo VIII](#) (El derecho a la libertad de pensamiento). OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia](#). OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 25 de agosto de 2005; CIDH. Verdad, justicia y reparación: [Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia](#). Capítulo 6. Grupos especialmente afectados en el contexto del conflicto armado. Sección E. Periodistas y comunicadores sociales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 diciembre 2013. Párrs. 374-400.

⁶ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia](#). OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 25 de agosto de 2005. Párr. 78.

9. El contexto de la violencia letal contra periodistas en Colombia y la impunidad de estos crímenes fue ampliamente desarrollado por los peritos Carlos Lauria⁷ y Germán Rey Beltrán⁸ en este caso.
10. Durante la audiencia pública, Carlos Lauria indicó que “Colombia figura entre los 10 países con mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo” y la impunidad de estos casos es casi absoluta⁹. Afirmó que “en 1998, cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia en el transcurso del año en represalia por su labor informativa, más que en cualquier otro país del mundo [...] Durante este periodo del conflicto civil armado y una ola de violencia criminal generaron un clima creciente de temor e intimidación para la prensa. Los actores del conflicto, desde los paramilitares hasta las guerrillas, pero también los políticos locales usaron a los periodistas como blanco por sus críticas, sus denuncias o por informar sobre temas sensibles”¹⁰. Concluyó que “[l]a vasta mayoría de estos crímenes ha quedado sin solución y sin castigo, y aun cuando la violencia letal ha disminuido en número en los últimos años, estos indicadores no constituyen tranquilidad alguna para muchas víctimas de crímenes pasados. En especial, en la medida que hay más casos de asesinatos que prescriben”¹¹.
11. En su peritaje rendido ante fedatario público (affidavit)¹², Germán Rey Beltrán explicó que, entre 1977 y 2015, en Colombia se produjeron 152 asesinatos de periodistas por razón del oficio. Sostuvo que el mayor porcentaje de las víctimas vivía en regiones y zonas con presencia de actores armados ilegales y pertenecían a pequeños medios locales, principalmente la radio (emisoras locales) y la prensa (pequeños periódicos o semanarios). Informó que los perpetradores de estos asesinatos fueron los diversos actores del conflicto armado colombiano, muchas veces en alianzas entre autoridades locales, actores armados ilegales y políticos corruptos y que los periodistas fueron asesinados luego de difundir investigaciones periodísticas y denuncias sobre casos de corrupción. Según el perito “existe una gran sintonía entre el caso de Nelson Carvajal Carvajal y la gran mayoría de patrones de violencia planteados en este caso”. A su juicio, “este es un caso emblemático que podría ponerse como ejemplo de lo sucedido con la violencia contra periodistas en Colombia”¹³. Al respecto, sostuvo que:

1. Nelson Carvajal Carvajal era un periodista ubicado en una región del país azotada por el conflicto y con presencia importante de actores como la guerrilla de las FARC, pero también con la presencia de civiles a los que el periodista investigaba y denunciaba a través de la emisora Radio Sur en el municipio de Pitalito en el Huila; 2. Son múltiples los testimonios que atestiguan que Nelson Carvajal Carvajal denunciaba casos de corrupción en el municipio, lo que hemos señalado como un patrón desencadenante de enorme agresividad y violencia en este y otros municipios del país; 3. En el cuadro general donde se presentan uno a uno los 152 asesinatos de periodistas ocurridos en Colombia desde 1977 a 2015, figura con el numeral 90, el de Nelson Carvajal Carvajal y se dice que “realizaba denuncias sobre irregularidades en la Administración. También realizaba denuncias contra un constructor por irregularidades” [...]; 4. Se acudió a la acción criminal de un sicario. Su manera de actuar no deja duda sobre la intención explícita de matar al periodista y de sus intenciones y las de los autores intelectuales del homicidio. Como otros casos de periodistas, fue asesinado de varios tiros en la calle; 5. Nelson Carvajal

⁷ Peritaje rendido por Carlos Lauria (propuesto por la Comisión Interamericana) durante la Audiencia Pública celebrada en este caso el 22 de agosto de 2017.

⁸ Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

⁹ Peritaje rendido por Carlos Lauria (propuesto por la Comisión Interamericana) durante la Audiencia Pública celebrada en este caso el 22 de agosto de 2017.

¹⁰ Peritaje rendido por Carlos Lauria (propuesto por la Comisión Interamericana) durante la Audiencia Pública celebrada en este caso el 22 de agosto de 2017.

¹¹ Peritaje rendido por Carlos Lauria (propuesto por la Comisión Interamericana) durante la Audiencia Pública celebrada en este caso el 22 de agosto de 2017.

¹² Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

¹³ Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

Carvajal era de un medio local, en su caso radial, un patrón encontrado en nuestro Informe; 6. Nelson Carvajal Carvajal tenía, como lo atestiguaron en su momento muchas personas, un reconocimiento social por su trabajo. En otras palabras: tenía influencia en la comunidad, otro patrón que encontramos en el análisis de la violencia contra periodistas en Colombia; 7. Con el asesinato de periodistas se buscaba acallar una voz incómoda, crítica y respetada en la comunidad; 8. La actividad periodística del periodista, aunque estaba centrada en una emisora radial local, pertenecía en ese momento a una cadena radial –RCN– muy importante y reconocida en el país, lo que eventualmente posibilitaba la expansión de sus puntos de vista hacia otros lugares del país, y 9. El caso de Nelson Carvajal Carvajal cumple el patrón de indefensión de los periodistas locales, que aumenta sus riesgos al estar ubicados en zonas del conflicto.

12. Tal y como afirmó el perito “una de las grandes consecuencias de esta violencia es y ha sido la enorme e ignominiosa impunidad que han tenido los crímenes con los periodistas. La investigación criminal de estos delitos ha tenido actuaciones muy graves y generado nuevos delitos: testigos han sido asesinados, la comunidad periodística ha sido amedrentada, se ha expandido la estrategia del miedo hacia las comunidades de proximidad [y] las familias de algunos de estos periodistas asesinados han seguido sufriendo amenazas y exilio”¹⁴. De los 152 casos de asesinatos de periodistas documentados, “sólo en cuatro se ha podido revelar y sentenciar a toda la cadena del crimen, desde sus determinadores intelectuales hasta sus autores materiales”¹⁵. Al respecto, afirmó que “lo más grave de la impunidad no es que se hayan dado estos cuatro casos, sino que cerca del 50% de todos los crímenes contra periodistas en Colombia, hayan prescrito. Esto significa que judicialmente el tiempo para investigar, acusar y sentenciar ha finalizado y sus crímenes sepultados en el olvido”.¹⁶

b. La violencia contra periodistas en las Américas y el mundo

13. Según la información recabada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH¹⁷, la situación de violencia e impunidad se ha agudizado en los últimos años en algunos lugares de la región. Según las cifras reportadas, entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de noviembre de 2016, al menos 162 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación habrían sido asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. En los últimos tres años los índices de asesinatos contra periodistas se ha mantenido en niveles elevados. En 2014 se registraron 25 asesinatos presumiblemente vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, en 2015 sumaron 27 y en 2016 otros 33 asesinatos fueron documentados¹⁸. En ese período decenas de comunicadores habrían sido desplazados de sus lugares de trabajo y cientos recibieron amenazas o fueron hostigados o atacados por denunciar corrupción o reportar sobre organizaciones delictivas, la presencia de poderes fácticos y corrupción estatal.
14. La CIDH también ha observado la concentración de violencia contra comunicadores en zonas alejadas de las capitales, particularmente zonas de tránsito y/o fronteras. Durante la última década la mayoría de los asesinatos que se registraron en la región, así como otros tipos de agresiones contra periodistas tales como desapariciones, secuestros, amenazas, intimidaciones, entre otras, se presentan en lugares alejados de los grandes centros urbanos. La Relatoría Especial documentó entre 2011 y 2015 el asesinato de 131 periodistas de los cuales 124 ocurrieron en zonas rurales o

¹⁴ Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

¹⁵ Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

¹⁶ Peritaje rendido ante fedatario público (affidavit) por Germán Rey Beltrán el 1 de agosto de 2017.

¹⁷ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

¹⁸ CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17, 15 de marzo 2017. Párr. 8.

regiones¹⁹. En buena parte de estos casos se trataba de periodistas que contribuían de manera extraordinaria a mantener informada a sus comunidades.

15. Pese a la gravedad de la violencia perpetuada contra los y las periodistas que informan a la sociedad sobre asuntos de notable interés público, la situación de impunidad no ha mejorado. El estudio efectuado por la Relatoría Especial sobre asesinatos de periodistas cometidos entre 1995 y 2005 comprobó que la gran mayoría de las investigaciones avanzaban muy lentamente y existían graves deficiencias que impedían recabar evidencias relevantes de manera adecuada y oportuna, además de falencias en las líneas lógicas de investigación y en la determinación de posibles patrones. Varias de las investigaciones se encontraron con obstáculos y obstrucciones que afectaron negativamente el grado de diligencia y efectividad con que fueron impulsadas. La mayor parte de las investigaciones no se habían concluido. Del mismo modo, fueron pocos los casos en que se identificó a alguno de los responsables y solo en casos muy excepcionales se determinó quiénes eran los autores intelectuales. También fueron muy pocas las investigaciones que concluyeron con condenas y en diversos de los casos en que esto sí sucedió las penas aún no se habían hecho efectivas²⁰.
16. Estos patrones de asesinatos de periodistas en las Américas se enmarcan en un contexto mayor de violencia contra periodistas a nivel global, que no puede ser ignorado por el Tribunal. Tal y como explicó el perito Carlos Lauria durante la audiencia pública²¹:

La violencia letal contra la prensa y la impunidad en la investigación de estos crímenes representa la más grave de las amenazas contra la libre circulación de expresiones y opiniones en todo el mundo. A nivel global los asesinatos de periodistas en general proceden de dos esquemas amplios: la intimidación contra los que denuncian la corrupción, revelan actos ilícitos, o informan sobre la delincuencia y los casos en que la violencia cotidiana por parte de grupos radicalizados o la delincuencia organizada obstruye la acción de la justicia. El hecho de que el asesinato de periodista sin sentir el peso de la ley se haya convertido en los últimos 30 años en un hecho común posibilita la coincidencia de estos dos esquemas. Con demasiada regularidad los Estados muestran que no solo carecen de la capacidad para impartir justicia, en los casos de asesinatos de periodistas sino que no exhiben la voluntad necesaria para hacerlo.

Según el Comité de Protección de Periodistas (CPI), desde 1992 a la actualidad un total de 1249 periodistas fueron asesinados en todo el mundo por razones vinculadas a su oficio y de esa cifra, un total de 695 fueron asesinados con total impunidad. Según esos mismos datos, los asesinos de periodistas no enfrentan las consecuencias de sus actos en 9 de cada 10 casos. Al mismo tiempo, casi 9 de cada 10 casos las víctimas ofrecían cobertura informativa sobre acontecimientos de sus regiones de origen. Organizaciones internacionales y domésticas de defensa de la libertad de prensa han documentado en forma vasta innumerables casos que no registran ningún avance en la búsqueda de justicia pese a la existencia de pruebas que apuntan a los posibles culpables. En otros, los funcionarios de las institucionales encargadas de cumplir la ley, no siguen indicios, no entrevistan testigos, no logran reunir suficientes elementos de prueba y ni siquiera completan los procesos penales pendientes. Datos del CPI, obtenidos del análisis de los casos de 1992 hasta la fecha muestran que los actores estatales, los funcionarios gubernamentales e incluso

¹⁹ CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017. Párr. 9.

²⁰ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

²¹ Peritaje rendido por Carlos Lauria (propuesto por la Comisión Interamericana) durante la Audiencia Pública celebrada en este caso el 22 de agosto de 2017.

miembros de las fuerzas de seguridad son sospechosos de ser responsables de más del 30% de los asesinatos de periodistas a nivel global. En cientos de casos, organizaciones políticas o individuos con gran influencia económica y política son las sospechas de estos asesinatos. Ante esta realidad, no sorprende la falta total en temas de impartición de justicia.

Los países donde se ha constatado altos índices de violencia contra periodistas suelen caracterizarse por la débil capacidad investigativa y procesal de sus instituciones o por la corrupción y deficiencia que domina su sistema judicial. A escala global, el fracaso ha sido casi total a la hora de enjuiciar a autores intelectuales de los periodistas asesinados por su trabajo. En apenas 5% de los casos, se ha llegado a la justicia plena. En la mayoría no hubo ningún tipo de justicia.

17. A la luz de la magnitud del problema de la violencia cometida contra periodistas en la región y en el mundo y los elevados índices de impunidad, en las últimas dos décadas, la CIDH y su Relatoría Especial²² — junto con el resto de la comunidad internacional²³ — se ha ocupado de manera prioritaria de este problema. Este trabajo da cuenta del esfuerzo concertado de la comunidad internacional para dotar de contenido especial a las obligaciones estatales de combatir la violencia contra periodistas y su impunidad (*infra*).

III. LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

18. Cuando se trata de la violencia contra periodistas por razones vinculadas a la labor informativa, el Estado está obligado a adoptar medidas positivas encaminadas a prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y asegurar la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, castigo de quienes resulten responsables, y así evitar la impunidad y los efectos perjudiciales a la libertad de expresión que ésta genera. Estas obligaciones adquieren una intensidad especial en aquellos países o regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, y existen altos índices de impunidad.
19. La Comisión observa que las obligaciones positivas de prevenir, proteger e investigar la violencia contra periodistas han sido ampliamente desarrolladas por el sistema jurídico internacional. Existe un amplio consenso internacional en torno a la importancia del cumplimiento coherente y recíproco de estas tres obligaciones: para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es

²² CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. *Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia*. OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 25 de agosto de 2005; CIDH. Informe Anual 2013. *Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*. Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. *Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*. Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

²³ Ver, por ejemplo, Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de derechos Humanos. Resolución 27/5. 19 de septiembre de 2014. A/HRC/27/L.7 Disponible en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/27/L.7; Naciones Unidas. Consejo de seguridad. Resolución 2222. 27 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10115.pdf?view=1>; Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 70/162. 10 de febrero de 2016. A/RES/70/162. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/162>; Naciones Unidas. Asamblea General. 26 de septiembre de 2016. A/HRC/33/L.6. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/33/L.6; Naciones Unidas. Asamblea General. 21 de febrero de 2014. A/RES/68/163. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/26/PDF/N1344926.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Asamblea General. *The safety of journalists. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. A/HRC/24/23. Julio 1, 2013; Unesco. *Es tiempo de romper el ciclo de violencia contra periodistas. Puntos clave del informe 2016 de la Directora General de la UNESCO sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad*, y Consejo de Europa. Comité de Ministros. Declaración del Comité de Ministros sobre la protección a periodistas y la seguridad de periodistas y otros actores de los medios. Adoptada el 30 de abril de 2014. Disponible para consulta en: <http://www.coe.int/en/web/media-freedom/committee-of-ministers>.

necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia²⁴.

20. Este esfuerzo concertado refleja el reconocimiento por la comunidad internacional de la violencia contra los periodistas y la impunidad como un problema global, que atenta con los principios democráticos y el derecho de la sociedad a estar informada.
21. Como se detalla a continuación, dicho consenso ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales, como resoluciones de los órganos políticos de las Naciones Unidas y de la UNESCO, resoluciones y recomendaciones de la Asamblea General de la OEA y del Comité de Ministros del Consejo de Europa, declaraciones y planes de acción que cuentan con amplio respaldo estatal, opiniones de los órganos de tratados y mecanismos especiales, la jurisprudencia de los sistemas universal y regional, la práctica de los Estados, así como otras fuentes del derecho internacional.

a. Sistema Universal

22. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó su primera resolución sobre el problema de la violencia contra periodistas²⁵. En esta resolución la Asamblea instó a los países a que “garanticen a los periodistas el libre y eficaz ejercicio de sus tareas profesionales y condenen decididamente todos los ataques contra ellos”. Con posterioridad, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varias resoluciones sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad²⁶. En las resoluciones más recientes de 2014 y 2015, la Asamblea General exhortó a los Estados a adoptar un enfoque integral de políticas de prevención, protección y procuración de justicia²⁷.
23. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó en 2006 la resolución S/RES/1738, conforme a la cual se estableció un enfoque integral orientado a la acción de la seguridad de los periodistas en los conflictos armados²⁸. Estos principios fueron reiterados en la Resolución 2222 de 2015²⁹. En esta última resolución el Consejo manifestó “que el examen de la cuestión de la protección de los periodistas en los conflictos armados por el Consejo de Seguridad se basa en la urgencia y la importancia de esa cuestión”, y resolvió que:

Condema enérgicamente la impunidad generalizada de las violaciones y los abusos cometidos contra los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado en situaciones de conflicto armado, que a su vez puede contribuir a que esos actos se repitan;

Destaca que los Estados tienen la responsabilidad de cumplir las obligaciones

²⁴ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

²⁵ Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 45/76 sobre Cuestiones Relativas a la Información. 11 de diciembre de 1990. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/76&Lang=S>.

²⁶ Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 68/163. 18 de diciembre de 2013. A/RES/68/163. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/26/PDF/N1344926.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Asamblea General. 18 de diciembre de 2014. A/RES/69/185. Disponible en: <http://undocs.org/sp/A/RES/69/185>; Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 70/162. 17 de diciembre de 2015. A/RES/70/162. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/162>.

²⁷ Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 68/163. 18 de diciembre de 2013. A/RES/68/163. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/26/PDF/N1344926.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Asamblea General. 18 de diciembre de 2014. A/RES/69/185. Disponible en: <http://undocs.org/sp/A/RES/69/185>; Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 70/162. 17 de diciembre de 2015. A/RES/70/162. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/162>;

²⁸ Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Resolución 1738/06 de 23 de diciembre de 2006. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1738%20%282006%29>

²⁹ Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Resolución 2222/15 de 23 de mayo de 2015. S/RES/2222 (2015) Disponible en: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF6C9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf

pertinentes impuestas por el derecho internacional de poner fin a la impunidad y procesar a los responsables de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario;

Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas apropiadas para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado en situaciones de conflicto armado mediante la realización de investigaciones imparciales, independientes y efectivas dentro de su jurisdicción, y a que sometan a los autores de esos crímenes a la acción de la justicia.

24. El Consejo de Derechos Humanos también ha adoptado varias resoluciones sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad³⁰. En su más reciente resolución, adoptada en 2016, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que “la impunidad por atentados y actos de violencia contra periodistas constituye uno de los principales obstáculos para la seguridad de los periodistas y que la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra ellos es un elemento clave en la prevención de atentados en el futuro”³¹.
25. El Consejo instó a los Estados a “que formulen y pongan en práctica estrategias para luchar contra la impunidad de los atentados y la violencia contra periodistas, entre otros medios recurriendo, a [buenas prácticas...]:
 - a) La creación de dependencias especiales de investigación o comisiones independientes; b) El nombramiento de un fiscal especializado; c) La adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos; d) La formación de fiscales y miembros del poder judicial en materia de seguridad de los periodistas; e) El establecimiento de mecanismos de reunión de información, como bases de datos, que permitan obtener información verificada sobre amenazas y atentados contra periodistas; f) El establecimiento de un mecanismo de alerta temprana y de respuesta rápida para que los periodistas, en caso de ser objeto de amenazas, puedan recurrir inmediatamente a las autoridades y a medidas de protección”³².
26. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha adoptado importantes resoluciones sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad³³. En 1997, antes del asesinato del periodista Nelson Carvajal, la Conferencia General de la organización adoptó la emblemática resolución 120/97 – promovida por varios países de la región, incluido

³⁰ Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 33/L6 de 26 de septiembre de 2016. A/HRC/33/L6. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/33/L6; Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 27/5, de 19 de septiembre de 2014. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/166/17/PDF/G1416617.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 21/12, de 27 de septiembre de 2012. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/171/76/PDF/G1217176.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 12/16, de 2 de octubre de 2009, disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/166/92/PDF/G0916692.pdf?OpenElement>; Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 13/24, de 26 de marzo de 2010, relativa a la protección de los periodistas en situaciones de conflicto armado. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/154/58/PDF/G1015458.pdf?OpenElement>.

³¹ Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 33/L6 de 26 de septiembre de 2016. A/HRC/33/L6. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/33/L6

³² Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 33/L6 de 26 de septiembre de 2016. A/HRC/33/L6. Disponible en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/33/L6

³³ Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. 27 de marzo de 2008. Decisión sobre seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad adoptada por el Consejo Intergubernamental del PIDC en su 26ª sesión; Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. 24-26 de marzo de 2010. Decisión sobre seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad adoptada por el Consejo Intergubernamental del PIDC en su 27ª sesión; Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. 22-23 de marzo de 2012. Decisión sobre seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad adoptada por el Consejo Intergubernamental del PIDC en su 28ª sesión.

Colombia – en la que expresó “que el asesinato de periodistas va más allá del hecho de privarle de la vida a una persona, ya que presupone un cercenamiento de la libertad de expresión, con todo lo que ello significa como limitación a libertades y derechos de toda la sociedad” y demandó a las autoridades a cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y reparar sus consecuencias. En particular pidió a los Estados Miembros:

que adopten las medidas necesarias para poner en práctica las siguientes recomendaciones: (a) que los gobiernos adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia, (b) que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, (c) que se dicte legalmente que los responsables de los delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios deban ser juzgados en tribunales civiles y/o regulares.³⁴

27. Desde ese entonces, la UNESCO ha trabajado consistentemente en esta materia. En 2012, la Conferencia General adoptó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, al que ha dado seguimiento a través de indicadores y reuniones periódicas³⁵. El Plan de Acción propone una serie de medidas a ser adoptadas por los organismos de las Naciones Unidas ante los Estados Miembros y otras organizaciones e instituciones, así como medidas de sensibilización y de fomento de iniciativas de seguridad, entre otros. En ese sentido, el Plan tiene el objetivo de “obrar en favor del establecimiento de un entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, tanto en situaciones de conflicto como en otras, a fin de fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo”.
28. El Comité de Derechos Humanos también se ha referido a las obligaciones del Estado en esta materia. En su Observación General No. 34 estableció que:

Los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión. [...] Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en circunstancia alguna, los atentados contra una persona, con inclusión de formas tales como la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y el asesinato. Los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades. También suelen serlo quienes reúnen y analizan información sobre la situación de los derechos humanos o publican informes sobre esos derechos, incluidos los jueces y los abogados. Todos esos atentados deben ser objeto de una activa y puntual investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, a sus representantes³⁶.

³⁴ Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Conferencia General. 12 de noviembre de 1997 29 C/DR.120. (Presentado por Uruguay, Colombia, Costa Rica, Alemania y México y apoyado por Belarús, Brasil, Canadá, Chile, Comoras, Ecuador, Federación de Rusia, Gabón, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Ucrania y Venezuela). Disponible en: <http://media.sipiapa.org/adjuntos/185/documentos/001/790/0001790360.pdf>

³⁵ Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad; Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 25 de julio de 2013. Indicadores de la Seguridad de los Periodistas: Nivel Internacional; Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 25 de julio de 2013. Indicadores de la Seguridad de los Periodistas: Nivel Nacional; Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 25 de julio de 2013. Aplicación de los Indicadores de la Seguridad de los Periodistas (ISP) de la UNESCO; Unesco. [Informe de la Directora General sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad](#). 2016.

³⁶ Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 34. CCPR/C/GC/34. 12 de septiembre de 2011. Párr. 44.

29. Los Relatores Especiales para la Libertad de Opinión y Expresión y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias se han pronunciado consistentemente sobre el problema de la violencia contra periodistas y la impunidad que prevalece³⁷.
30. El Secretario General de las Naciones Unidas ha emitido varios informes sobre la temática, en seguimiento a mandatos designados por la Asamblea General de la OEA o el Consejo de Derechos Humanos³⁸. En 2017, el nuevo Secretario General, Antonio Guterres, decidió establecer un canal directo y continuo de comunicación con una coalición de organizaciones de libertad de prensa sobre la seguridad del periodismo para poder responder con eficacia ante la emergencia global³⁹.

b. Sistema interamericano

31. La Asamblea General de la OEA, por su parte, emitió su primera resolución sobre la violencia contra periodistas en junio de 1998 (AG/RES. 1550. En la resolución, la Asamblea General destacó que “en los últimos años se ha venido atentando contra el derecho a la vida de profesionales de la comunicación en el ejercicio de sus funciones”, y resolvió “condenar enérgicamente” estos atentados e “[i]nstar a los Estados miembros a que profundicen las medidas necesarias para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas”⁴⁰.
32. En 2017, ante la gravedad de los asesinatos de periodistas en la región y el fracaso en la búsqueda de justicia, la Asamblea General adoptó una nueva resolución sobre esta materia, en la que instó a los Estados a redoblar esfuerzos en esta materia⁴¹. En este sentido, resolvió:

Condenar los asesinatos, las agresiones y otros actos de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, en virtud de que no solo atacan contra la vida, la integridad y la libertad de expresión de las víctimas, sino también contra el derecho de toda persona a recibir información de interés público.

Reafirmar que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento, e instar a los Estados a implementar medidas integrales de prevención, protección, investigación y sanción de los responsables y a poner en práctica estrategias para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, compartiendo buenas prácticas, entre otras, i) la creación de fiscalías especializadas independientes; ii) la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos; y, iii) la formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas en libertad de expresión y seguridad de periodistas⁴².

33. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se ha ocupado en forma prioritaria del problema de los asesinatos contra periodistas y ha prestado especial atención al estado de las

³⁷ Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue. A/HRC/20/17. 4 de junio de 2012, y Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. A/HRC/20/22. 10 de abril de 2012.

³⁸ Ver, por ejemplo, Naciones Unidas. Secretario General. Informe sobre la violencia contra mujeres periodistas. A/72/290. 4 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/SafetyOfJournalists/Pages/SafetyOfWomenJournalists.aspx>

³⁹ Reporters Without Borders. 24 de mayo de 2017. [UN Secretary General opens channel of communication on safety of journalists](http://www.rwob.org/press-releases/un-secretary-general-opens-channel-of-communication-on-safety-of-journalists); CPJ. 23 de febrero de 2017. [UN Secretary General pledges to take action on journalist safety](http://www.cpj.org/2017/02/un-secretary-general-pledges-to-take-action-on-journalist-safety/).

⁴⁰ OEA. Asamblea General. AG/RES. 1550 (XXVIII-O/98). Atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas. (Resolución aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 2 de junio de 1998). Disponible para consulta en: <http://www.oas.org/es/council/AG/ResDec/Default.asp?q=&e=&evento=>

⁴¹ OEA. Asamblea General. BUSCAR DATO.

⁴² En este sentido, ver también pronunciamiento del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Disponible en: <https://vimeo.com/189812447>

investigaciones sobre estos delitos, a través de diversos pronunciamientos⁴³, informes⁴⁴, reportes especiales y decisiones sobre peticiones y casos⁴⁵.

34. En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la CIDH en Octubre de 2000, se reconoce que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada” (principio 9)⁴⁶.
35. En su informe anual de 1998, emitido poco después del asesinato de Nelson Carvajal, la CIDH, a través de su recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, reconoció que “[e]l asesinato de periodistas es la práctica más brutal para coartar la libertad de expresión en el continente”⁴⁷. La CIDH indicó que “esta práctica ha tenido dos objetivos concretos. Por un lado, ha buscado eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por el otro lado han buscado ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre atropellos, abusos, irregularidades e ilícitos de todo tipo. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos”⁴⁸.
36. La CIDH manifestó que “conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de estos periodistas, y sancionar a todos sus autores”. En este sentido, expresó que:

La renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Toda vez que este tipo de crímenes no solo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. Este efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los perpetradores de asesinatos de periodistas. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje

⁴³ CIDH. [Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión](#). Octubre 2000, y Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 25 de junio de 2012. Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión.

⁴⁴ CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. [Capítulo VIII](#) (El derecho a la libertad de pensamiento). OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: [Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia](#). OEA/Ser.L/V/II Doc.51. 31 de agosto de 2005; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística \(período 1995-2005\)](#). OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008; CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

⁴⁵ CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999, y CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999.

⁴⁶ CIDH. [Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión](#). Octubre 2000.

⁴⁷ CIDH. Informe Anual 1998. [Informe especial del relator sobre la libertad de expresión 1998](#). Pp. 48.

⁴⁸ CIDH. Informe Anual 1998. [Informe especial del relator sobre la libertad de expresión 1998](#). Pp. 48.

fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión.

37. En conclusión, la CIDH expresó que “el asesinato de un periodista que carece de una investigación efectiva y completa y sanción penal de los autores tanto intelectuales como materiales, conllevan una violación al derecho a informar y expresarse pública y libremente. Asimismo, el asesinato de un periodista constituye una agresión contra todo ciudadano con vocación de denunciar arbitrariedades y abusos a la sociedad, agravada por la impunidad de todos o alguno de sus autores. De esta manera, la falta de investigación seria y completa del asesinato de un periodista genera la responsabilidad internacional de los Estados por la violación del derecho a la libertad de expresión del periodista asesinado y de los ciudadanos en general a recibir información libremente y a conocer la verdad de lo acontecido”⁴⁹.
38. En su tercer informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999)⁵⁰, la Comisión recordó al Estado que “los periodistas no pueden ser considerados objetivos militares con base en su calidad como tal, y en consecuencia gozan de la protección contra ataques de las partes en el conflicto armado, bajo las normas del derecho internacional humanitario” Igualmente, la CIDH enfatizó que el Estado incurre en responsabilidad internacional bajo la Convención Americana y demás instrumentos aplicables, “cuando el Estado no cumple con su obligación de prevenir o investigar de manera seria, completa y exhaustiva las denuncias de tales hechos”. La CIDH recomendó al Estado colombiano “que adopte de inmediato medidas enérgicas para detener los ataques violentos contra periodistas y otras personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión. Esas medidas deben incluir la investigación penal seria, imparcial y efectiva de los casos de violencia contra los periodistas y la sanción de quienes los perpetren”.
39. La obligación de investigar los asesinatos de periodistas y su conexión con el derecho a la libertad de expresión también fue desarrollada por la CIDH en el informe de fondo N° 50/99, en el caso en 1988 del asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, que trabajaba para el semanario *Zeta* de Tijuana, México. En ese caso, la CIDH concluyó que si bien los autores materiales habían sido condenados, la “violación central” fue que el Estado mexicano no determinó “de manera definitiva y concluyente quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen”⁵¹. La Comisión hizo alusión a las evidencias que sugerían que la investigación no indagó adecuadamente sobre “numerosos elementos que apuntan a la existencia de un autor intelectual”, tales como el pago de US\$ 10.000 efectuado el día después del asesinato a los autores materiales por una empresa que pertenecía a una persona a quien Félix Miranda había criticado reiteradamente en sus columnas durante los meses previos a su muerte⁵². La CIDH concluyó que la “falta de investigación y sanción penal de los autores intelectuales del asesinato de Héctor Félix Miranda [...] conlleva la violación del derecho a informar y expresarse pública y libremente”⁵³. En igual sentido, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del

⁴⁹ CIDH. Informe Anual pp. 48. Ver asimismo, CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística (período 1995-2005). OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008. Párrs. 73 y 74. En su Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas, publicado en 2008 por la CIDH y su Relatoría Especial, se reconoció que “en el caso de la violación del derecho a la vida de los periodistas y comunicadores sociales, motivada por el ejercicio de su profesión, la impunidad en relación con dicha violación no sólo comporta un incumplimiento de la obligación que tienen los Estados de garantizar este derecho, sino también un incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión. La impunidad de las violaciones del derecho a la vida cometidas contra periodistas, en razón de su labor, tiene, además, como se ha señalado antes, el grave efecto de propiciar la repetición de las violaciones de ambos derechos, lo que es contrario también a la obligación que los Estados tienen de prevenir y evitar toda violación de los derechos humanos. Por tanto, el cumplimiento de la obligación de investigar adecuada y eficazmente las violaciones del derecho a la vida, y de combatir la impunidad en relación con estas violaciones, cuando se trata del asesinato de periodistas en razón del ejercicio de su labor, se convierte en una forma de cumplir con la obligación que los Estados tienen de garantizar plenamente, en el marco del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y social”.

⁵⁰ CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Capítulo VIII (El derecho a la libertad de pensamiento). OEA/Ser.L/V/II.102. Doc. 9 rev. 1. 26 febrero 1999.

⁵¹ CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 2 y 51.

⁵² CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 20, 29 y 65.

⁵³ CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 56.

Estado mexicano en el caso del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza, el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez⁵⁴. La Comisión concluyó que a pesar de que en el caso del señor Oropeza no fue posible establecer la responsabilidad de agentes del Estado en la violación del derecho a la vida, “la falta de una investigación exhaustiva, que conduzca a la sanción penal de todos los responsables del asesinato de un periodista, constituye igualmente una violación al derecho a la libertad de expresión, por el efecto atemorizador que tiene la impunidad sobre la ciudadanía”⁵⁵.

40. Más recientemente, la CIDH, a través de su Relatoría Especial, emitió dos informes temáticos que desarrollan ampliamente las obligaciones positivas de los Estados en materia de prevención, protección y procuración de justicia en caso de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación⁵⁶. Se trata de obligaciones recíprocas que tienen un carácter específico y que en aquellos países o regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, adquieren un carácter reforzado⁵⁷. Así por ejemplo, la CIDH manifestó que en el cumplimiento de su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los responsables por los hechos de violencia cometidos contra periodistas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, los Estados deben hacer hincapié de algunas obligaciones específicas, las cuales incluyen: (i) la obligación de adoptar un marco institucional adecuado que permita investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva la violencia contra periodistas; (ii) la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima; (iii) la obligación de efectuar investigaciones en un plazo razonable y (iv) la obligación de facilitar la participación de las víctimas en las investigaciones⁵⁸. En particular, indicó que “la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas, dado que una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto, como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados y probablemente despertará cuestionamientos sobre la voluntad de las autoridades de resolver el crimen. [...] No haber agotado en forma completa las líneas lógicas de investigación ha incidido, sobre todo, en que en general no se haya identificado a los autores intelectuales”.
41. La Corte Interamericana, por su parte, también se ha referido a la obligación de proteger y procurar justicia en los casos de violencia contra periodistas. En el *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia*, la Corte Interamericana declaró al Estado responsable por las agresiones sufridas por un periodista mientras cubría una manifestación y por el incumplimiento del deber de investigar esas agresiones con la debida diligencia⁵⁹.

c. Sistema europeo

42. En 1996, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió la Recomendación 96(4) sobre la protección de periodistas en situación de conflicto y tensión⁶⁰. El Comité afirmó que “la libertad de los medios de comunicación y el ejercicio libre e irrestricto del periodismo deben ser respetados en

⁵⁴ CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999.

⁵⁵ CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999.

⁵⁶ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia), y CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

⁵⁷ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia). Párrafo 33.

⁵⁸ CIDH. [Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 175 y ss.

⁵⁹ Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248.

⁶⁰ Consejo de Europa. Comité de Ministros. Recommendation No. R (96) 4. Protección de Periodistas en Situación de Conflicto y Tensión. Adoptada el 3 de Mayo de 1996. Disponible en: <https://rm.coe.int/16804ff5a1>

situaciones de conflicto y tensión, ya que el derecho de las personas y del público en general a ser informado sobre todos los asuntos de interés público y poder evaluar las acciones de las autoridades públicas y otras partes involucradas son especialmente importantes en tales situaciones". En la Recomendación se instó especialmente a los Estados a "recurrir a todos los medios apropiados para llevar ante la justicia a los responsables de esos ataques, independientemente de que estén planificados, fomentados o cometidos por personas pertenecientes a organizaciones terroristas u otras, personas que trabajen para el gobierno u otras autoridades públicas o personas que actúen en una capacidad individual".

43. En 2014, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una importante declaración en la que reafirmó que la protección de periodistas y trabajadores de medios y combatir la impunidad de estos crímenes es prioridad política urgente de los Estados miembros del Consejo de Europa⁶¹. El Comité instó a los Estados Miembros a que:

[...] cumplan sus obligaciones positivas de proteger a los periodistas y otros miembros de los medios de comunicación de cualquier forma de ataque y a poner fin a la impunidad en cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; e invita a los Estados Miembros a que revisen al menos una vez cada dos años la conformidad de las leyes y prácticas nacionales con estas obligaciones;

[...] contribuyan a los esfuerzos internacionales concertados para mejorar la protección de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación garantizando que los marcos jurídicos y las prácticas de aplicación de la ley se ajusten plenamente a las normas internacionales de derechos humanos. La aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad es una necesidad urgente y vital. [...]

44. En seguimiento a esta Declaración, el Comité adoptó en 2016, la Recomendación CM/Rec(2016)4 y sus directrices. La Recomendación reconoce expresamente el impacto de la violencia contra periodistas y su impunidad el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y en los sistemas democráticos y el estado de Derecho⁶². Asimismo, el Comité reconoce que "dada la magnitud y la gravedad de las amenazas y ataques contra periodistas y otros agentes de los medios de comunicación en Europa y sus efectos nocivos sobre el funcionamiento de la sociedad democrática, *son necesarias medidas de gran alcance a nivel internacional y nacional para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros actores de los medios de comunicación y erradicar la impunidad. Las directrices se organizan en cuatro pilares: prevención, protección, enjuiciamiento (incluida una atención específica a la impunidad) y promoción de la información, la educación y la sensibilización.* [...]"
45. Sobre la obligación de investigar y combatir la impunidad, las directrices del Comité de Ministros establecen que "es imperativo que todos los implicados en asesinatos, ataques y malos tratos de periodistas y otros actores de los medios de comunicación sean llevados ante la justicia. Las investigaciones sobre esos crímenes y el enjuiciamiento de los responsables de ellos deben, por lo tanto, cumplir una serie de requisitos generales". Asimismo, reconoce que "cuando los responsables de tales crímenes no son llevados ante la justicia, puede surgir una cultura de impunidad, lo que exige cursos particulares de acción". A saber:

⁶¹ Consejo de Europa. Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors. Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2014 at the 1198th meeting of the Ministers' Deputies. Disponible en:

[https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl\(30.04.2014\)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl(30.04.2014)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true)

⁶² Consejo de Europa. Comité de Ministros. Recommendation CM/Rec (2016)4[1] on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors. Adoptada el 13 de Abril de 2016. Disponible en: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9

24. Cuando no se inician o se obstaculizan de diversas maneras los enjuiciamientos por delitos contra periodistas y otros actores de los medios de comunicación, se crean retrasos inaceptables en la administración de justicia y se deja impunes a los responsables de los crímenes. Por lo tanto, cuando un agente del Estado ha sido acusado de delitos que impliquen malos tratos, es de suma importancia que el proceso penal y la sentencia no prescriban. Para mantener la confianza del público en el sistema de justicia, medidas como la concesión de una amnistía o indulto no deben ser consideradas ni aceptadas sin razones convincentes. La ley debería prever sanciones adicionales o agravadas aplicables a los funcionarios públicos que, por descuido, complicidad o diseño, actúen de manera que impidan u obstruyan la investigación, persecución o castigo de los responsables de crímenes contra periodistas u otros actores de los medios de comunicación por su contribución al debate público.

25. Cuando las investigaciones y los enjuiciamientos no lleven a la justicia a los autores de asesinatos de periodistas u otros agentes de los medios de comunicación u otros crímenes graves contra ellos, los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de realizar investigaciones especiales judiciales o no judiciales sobre casos específicos u organismos especializados independientes para llevar a cabo estas investigaciones de manera continua. Estos últimos pueden tener autoridad especial e implicar la participación o el liderazgo de medios respetados y / o figuras de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en el proceso de búsqueda de hechos sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades estatales de procesar e investigar a los perpetradores justicia⁶³.

46. La Corte Europea de Derechos Humanos, por su parte, ha adoptado varias decisiones relaciones a ataques, amenazas y asesinatos de periodistas en distintos contextos. Así por ejemplo, la Corte Europea ha reiterado que el artículo 10 del Convenio obliga al Estado no sólo a abstenerse de restringir arbitrariamente este derecho, sino también tomar las medidas apropiadas para salvaguardarlo. Este principio fue reconocido en los casos *Özgür c. Turquía* y *Kilic c. Turquía* de 2000 y reafirmado posteriormente en el caso *Dink c. Turquía* en 2010. En estos casos, la Corte reiteró sus consideraciones sobre las obligaciones positivas del Estado en la área de libertad de expresión, según las cuales los Estados están obligados a crear - al tiempo que un sistema eficaz de protección de periodistas - un entorno favorable para la participación en el debate público de todas las personas interesadas, lo que les permite expresar sus opiniones e ideas sin temor, incluso si éstas van en contra de las autoridades oficiales o una gran parte de los opinión, incluso cuando estas [opiniones o ideas] son irritantes o chocantes para autoridades u opinión pública⁶⁴.
47. Finalmente, la oficina del representante para la libertad de prensa de la OSCE también ha emitido pronunciamientos y guías para los países miembros sobre la seguridad de periodistas y la lucha contra la impunidad⁶⁵.

d. Prácticas nacionales

48. La práctica de algunos países de la región también da cuenta de la importancia otorgada al combate de la violencia contra periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes y la necesidad de

⁶³ Consejo de Europa. Comité de Ministros. Recommendation CM/Rec (2016)4[1] on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors. Adoptada el 13 de Abril de 2016. Disponible en: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9

⁶⁴ Corte Europea de Derechos Humanos. Case of *Özgür Gündem v. Turkey*. Application no. 23144/93. Judgment 16 March 2000; Corte Europea de Derechos Humanos. Case of *Kiliç v. Turkey*. Application no. 22492/93. Judgment 28 March 2000, y Corte Europea de Derechos Humanos. *Affaire Dink c. Turquie*. Requêtes Nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09. Arrêt 14 septembre 2010.

⁶⁵ Office of the Representing on Freedom of the Media: Safety of Journalists Guidebook, 2nd edition, 2014. Disponible en: <http://www.osce.org/fom/118052>

implementar medidas especiales de prevención, protección y procuración de justicia. Se trata de países de las Américas en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, y padecen de una cultura de impunidad que no ha podido ser superada.

49. Así, países como Colombia, México y Honduras han establecido programas de protección especiales para periodistas. En el caso colombiano, el programa de protección a periodistas, que opera desde el año 2000, configura el más antiguo y consolidado de la región. Por su parte, el programa de protección mexicano fue establecido en 2012 y el programa de Honduras fue legalmente establecido en 2016. Asimismo, otros países han tomado medidas para incluir a los periodistas y trabajadores de medios como personas beneficiarias en programas de protección, como Brasil y Guatemala. Estos programas reconocen que los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, en determinados contextos y por sus condiciones mismas, están expuestos a riesgos de una intensidad tal que, los Estados tienen una responsabilidad reforzada de brindar protección. En el caso colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de ese país ha señalado en muchas decisiones⁶⁶ que existe un deber reforzado de protección estatal frente a personas que en razón de sus funciones, la afiliación a un grupo político o el contexto social en que operan, deben ser protegidas de cualquier amenaza o vulneración de sus derechos por parte de actores violentos, incluso si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.
50. Los Estados también han reconocido la necesidad de reformar el marco normativo para garantizar la sanción efectiva de los crímenes contra periodistas⁶⁷. Así, por ejemplo, el Código Penal de Colombia prevé una circunstancia de agravación de los homicidios cometidos contra periodistas, aumentando la pena del homicidio simple de entre 208 y 450 meses a una pena de entre 400 y 600 meses de prisión. El Código penal colombiano asimismo prevé el crimen de “homicidio en persona protegida”, lo cual ocurre cuando una persona protegida por el derecho internacional humanitario es asesinada con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, incluidos “los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados”. Igualmente, estos delitos tienen un plazo de prescripción ampliado a 30 años⁶⁸. De manera similar, una reforma legal reciente en el Código Penal Federal mexicano pasó a prever en sus reglas generales de aplicación de sanciones que los delitos dolosos cometidos en contra de un “periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta” se aumentará hasta en un tercio la pena establecida. El Código Penal Federal prevé además que en estos casos, la pena se aumentará hasta una mitad cuando el delito sea cometido “por un servidor público en ejercicio de sus funciones” o “la víctima sea mujer y concurren razones de género en la comisión del delito”.
51. Asimismo, algunos Estados de la región han dado pasos para fortalecer las capacidades de los operadores de justicia para investigar con la debida diligencia los crímenes contra periodistas y combatir la impunidad, a través de la creación de unidades de investigación especializadas. Tal es el caso de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de México (2010)⁶⁹ y la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de la

⁶⁶ Ver, en este sentido, Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional Sentencia T 719 de 20 de agosto de 2003; Corte Constitucional. Sentencia 1037 de 23 de octubre de 2008, y Consejo de Estado Expediente 41187 reparación directa. Sentencia de 31 de agosto de 2017.

⁶⁷ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia). Diciembre 2013.

⁶⁸ Ver, [Ley 1426 DE 2010 de 29 de diciembre de 2010](#), por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas.

⁶⁹ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia). Diciembre 2013.

Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala (2001)⁷⁰. El Acuerdo que estableció la FEADLE reconoce expresamente que para cumplir con sus deberes legales en esta materia “resulta necesario redimensionar la actividad sustantiva de la Procuraduría General de la República, a fin de establecer mecanismos y políticas institucionales que permitan desarrollar un vigoroso impulso dirigido fundamentalmente a la investigación de los delitos en esta materia, así como a estimular las estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de una cultura eficaz de prevención del delito y de respeto de los derechos humanos, en especial los relacionados con la libertad de expresión”⁷¹.

52. Si bien no se dedica específicamente a abordar los crímenes contra periodistas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también ha dado apoyo a la investigación interna de crímenes contra periodistas en el país⁷². En 2015 la CICIG investigó el caso de los homicidios de dos periodistas como parte de un patrón de “estructuras homicidas de alto poder”⁷³. Por su parte, en Colombia fue establecida en 1999 una sub-unidad de investigación de asesinatos de periodistas, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

IV. INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO DE SUS OBLIGACIONES EN EL PRESENTE CASO

53. En el informe de Fondo emitido en el presente caso, la Comisión estimó que existen elementos de convicción suficientes y consistentes– en particular de aquellos manejados por los propios órganos estatales encargados de la investigación y proceso penal– para concluir que el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal estuvo vinculado a su labor como periodista y a su denuncia pública de corrupción y delincuencia local.
54. Dicho vínculo con su labor es relevante para analizar la respuesta estatal frente a los hechos. Como se describió anteriormente, en este tipo de casos el derecho internacional de los derechos humanos exige la adopción de medidas positivas encaminadas a asegurar la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, castigo de quienes resulten responsables, y así evitar la impunidad y los efectos perjudiciales a la libertad de expresión que ésta genera.
55. En el cumplimiento de su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los responsables por los hechos de violencia cometidos contra periodistas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, los Estados deben hacer hincapié de algunas obligaciones específicas, las cuales incluyen: (i) la obligación de adoptar un marco institucional adecuado que permita investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva la violencia contra periodistas; (ii) la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima; (iii) la obligación de efectuar investigaciones en un plazo razonable y (iv) la obligación de facilitar la participación de las víctimas en las investigaciones⁷⁴.
56. El cumplimiento de estas obligaciones específicas resulta crucial ya que el asesinato de un periodista por razón de su oficio es un delito selectivo, no es un delito común o tradicional, que no puede ser investigado como tal, por cuanto generalmente responde al cumplimiento de un plan o una estrategia, diseñado por una organización criminal, una red o una estructura de poder, cuya

⁷⁰ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares Interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y Procuración de la justicia). Diciembre 2013.

⁷¹ Procurador General de la República de México. [Acuerdo A/ 145 /10](#), por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, y se establecen sus funciones. DOF: 05/07/2010.

⁷² CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017.

⁷³ CIDH. Informe Anual 2016. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo IV (Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 de marzo 2017. Párrs. 99 y ss.

⁷⁴ CIDH. Informe Anual 2013. [Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 175 y ss.

ejecución apunta a causarle la muerte a un individuo, en razón del ejercicio del periodismo, a silenciarlo, generar un efecto de miedo y en definitiva cercenar el derecho a la libertad de expresión. Ciertamente, No basta con adelantar investigaciones de oficio y aplicar técnicas forenses y criminológicas clásicas relacionadas con la escena del crimen, para satisfacer la debida diligencia en este tipo de casos. Es preciso disponer de todos los recursos para identificar la estructura de poder que planeó y ejecutó el crimen, las personas o grupos que se beneficiaron del mismo, al igual que quienes los encubrieron. En aquellos países como Colombia, en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas por grupos poderosos, el cumplimiento de estas obligaciones específicas adquiere una especial intensidad.

57. Si bien es cierto “que el hecho de que la impunidad de un caso impida conocer lo sucedido, no puede llevar a este Tribunal a presumir que ocurrió una violación de derechos humanos y a condenar automáticamente al Estado por el incumplimiento del deber de respeto”, la obligación de investigar una posible violación al derecho a la vida de un periodista, por razones vinculadas a su oficio, constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección de estos derechos.
58. En efecto, cuando se trata de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la falta de cumplimiento de la obligación de investigar tales hechos puede implicar también un incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión⁷⁵. Al respecto, en los informes de fondo emitidos respecto de los casos Héctor Félix Miranda (México) y Víctor Manuel Oropeza (México), la Comisión se pronunció sobre la violación del derecho a la libertad de expresión en el asesinato de periodistas, a pesar de que no fue posible establecer la responsabilidad de agentes del Estado en la violación del derecho a la vida⁷⁶. En estos precedentes, la CIDH estableció que la falta de una investigación exhaustiva, que conduzca a la sanción penal de todos los responsables del asesinato de un periodista, constituye igualmente una violación al derecho a la libertad de expresión, por el efecto atemorizador que tiene la impunidad sobre la ciudadanía. Al respecto, la CIDH afirmó que este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”⁷⁷. En tal sentido, concluyó que el homicidio de los periodistas constituyó “una agresión contra todo ciudadano con vocación de denunciar arbitrariedades y abusos en la sociedad, agravada por la impunidad de sus autores”⁷⁸.
59. La impunidad de este tipo de hechos fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras⁷⁹. La impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves⁸⁰. En igual sentido, la Corte Interamericana se ha referido al efecto

⁷⁵ Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 215.

⁷⁶ CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 52; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999. Párr. 58.

⁷⁷ CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 52; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999. Párr. 58. *Ver también*, CIDH. Informe No. 136/10. Caso 12.658. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y Familia (Colombia). 23 de octubre de 2010. Párr. 136; CIDH. [Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo II: *Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 716. *Ver también*, Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 211.

⁷⁸ Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 52; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999. Párr. 58.

⁷⁹ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística \(período 1995-2005\)](#). OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008. Párr. 129.

⁸⁰ Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 70; CIDH. [Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y

amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza⁸¹.

60. En el presente caso, la Comisión determinó que el incumplimiento de la obligación de investigación y procuración de justicia se manifestó en la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas contra familiares de Nelson Carvajal y testigos que se presentaron durante las investigaciones, la ausencia de procedimientos adecuados en la recaudación de pruebas, la demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, así como la ineficacia del proceso penal para la determinación de todos los responsables. Las graves deficiencias de la investigación fueron corroboradas por las declaraciones rendidas ante esta Corte por el perito Guillermo Puyana Ramos⁸² y la testigo Lilia Hernández Ramírez⁸³. El perito Puyana Ramos al analizar las actuaciones del Estado colombiano en la investigación y juicios por el asesinato de Nelson Carvajal, de conformidad con el marco legislativo colombiano, concluyó que la investigación se caracterizó por la falta de la continuidad en la responsabilidad de la investigación, la cantidad de tiempo y lapsos de inactividad transcurridos entre las etapas procesales, la falta de coordinación interinstitucional entre las distintas investigaciones en curso y “la forma apresurada en que se resolvieron las investigaciones preliminares”, basado en informes policiales “sin mayores precisiones y sin que fuera notorio que el fiscal ejerció alguna labor de dirección de la investigación”. De igual manera, la testigo Hernández Ramírez confirmó durante la audiencia que las amenazas a testigos y a familiares de la víctima no fueron investigadas ni vinculadas a la investigación por el asesinato del periodista Carvajal Carvajal y que la investigación no se llevó a cabo de manera diligente.
61. Es claro que el asesinato de Nelson Carvajal estuvieron involucradas varias personas no solo como autores materiales e intelectuales, sino como encubridores a través de la práctica de amenazas. Sin embargo, tal y como concluyó la CIDH en su informe de fondo, las amenazas y actos de intimidación contra familiares y testigos no fueron vinculadas a la investigación de manera exhaustiva, ni se han vinculado con eficacia a la líneas lógicas de investigación que permitan la determinación de todos los responsables, materiales e intelectuales. Por el contrario, 18 años después, el Estado parece reconocer que se han abandonado importantes líneas de investigación, denunciadas por los familiares de la víctima desde un inicio, las cuales debieron ser investigadas y agotadas en forma exhaustivas en aquel primer momento. Esto tiene graves consecuencias para el presente caso, en el que existe una sentencia absolutoria contra varias personas y es posible que el caso sea declarado prescrito bajo los términos legales aplicables.
62. Tal y como se observó en el informe de Fondo, la omisión del Estado en realizar una investigación diligente de los hechos del presente caso, donde – de conformidad con una serie de indicios - pudiese haberse configurado una violación a la obligación de respeto del derecho a la vida, constituye, no solo una violación del derecho de acceso a la justicia de los familiares del periodista Nelson Carvajal, sino que configura, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la libertad de expresión en perjuicio del periodista Nelson Carvajal. El derecho a la libertad de expresión además se ve afectado en su dimensión social. Como lo explicó el perito David Kaye, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión e información, en este caso la actuación del Estado no tiene implicaciones únicamente para el derecho a la libertad de expresión del periodista,

prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 2.

⁸¹ Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 148; CIDH. Informe No. 136/10. Caso 12.658. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y Familia (Colombia). 23 de octubre de 2010. Párr. 136; CIDH. Informe No. 50/99. Caso 11.739. Héctor Félix Miranda (México). 13 de abril de 1999. Párr. 52; CIDH. Informe No. 130/99. Caso No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza (México). 19 de noviembre de 1999. Párr. 58. Ver también, CIDH. *Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*. Capítulo II: *Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 716.

⁸² Peritaje de Guillermo Puyana Ramos, rendido ante Fedatario Público (*affidavit*) el 8 de agosto de 2017.

⁸³ Testimonio de Lilia Hernández Ramírez, rendido durante la audiencia pública celebrada en este caso el 22 de Agosto de 2017.

por el contrario, el derecho de la sociedad a estar debidamente informada también ha sido afectado⁸⁴. Asimismo, el experto recordó que según el Comité de Derechos Humanos, “puede haber circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de personas o entidades privadas”⁸⁵.

63. Asimismo, la Comisión estimó que las reiteradas amenazas y hostigamientos a testigos y familiares de la víctima, sumadas a la falta de medidas de protección y de garantías de investigación independiente, tuvieron un efecto amedrentador e intimidante para que los familiares de Nelson Carvajal desistieran de participar como querellantes en el proceso y configuraron obstrucciones en las investigaciones y en los procesos penales llevados a cabo. Al respecto, la Comisión determinó que estos hechos afectaron la integridad psíquica y moral de los familiares, quienes a más dieciséis años de los hechos, no han podido conocer la verdad sobre lo ocurrido y no han encontrado justicia. Finalmente, la CIDH consideró que la salida del país de los familiares de Nelson Carvajal Carvajal fue consecuencia de las amenazas sufridas, la falta de protección estatal y la impunidad que ha caracterizado este caso, imputables al Estado.
64. Durante la audiencia pública celebrada en este caso, Judith Carvajal⁸⁶, aportó información relevante sobre las amenazas que recibieron. La testigo indico que sufrió amenazas y que la protección estatal termino siendo un castigo, “no miraba justo que habían matado a Nelson y que por tratar de ayudar me dieran a mí una casa por cárcel [...]”. Afirmando que “en la medida en que se fueron reabriendo los procesos fuer la otra parte de la familia recibiendo amenazas”. Manifestó que por el tipo de amenazas “era algo que tenía programado ellos [los perpetradores], fue “un martirio permanente” a Nelson lo mataron pero a nosotros nos han hecho agonizar todo el tiempo, desde que mataron a Nelson hasta ahora que estamos en esto”.
65. Asimismo, confirmó los efectos generados por el asesinato del periodista y su impunidad en su familia y la comunidad de Pitalito. La testigo describió el impacto de la muerte del periodista y la impunidad en los miembros de la familia “sufrimos muchísimo”. Manifestó que “la comunidad perdió mucho, ya los noticieros no emitían en cierta forma la verdad de las cosas”, “Nelson creía que denunciando las autoridades investigaban [y] murió inocentemente creyendo que se haría justicia”. “Perdió la familia, perdió la sociedad, perdió el pueblo, perdimos todos, han ganado los que les gusta la corrupción, [...] con Nelson quedó el temor sembrado de hacerlo como lo hacía el”, concluyó.

V. ACLARACIONES SOBRE EL TRAMITE DEL CASO

66. Tal y como consta en el informe de fondo emitido en el presente caso, el 11 de noviembre de 2004, la Comisión notificó a las partes el Informe de Admisibilidad; les concedió un plazo de dos meses para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo de la petición, y se puso a disposición de las partes para facilitar un proceso de solución amistosa. La peticionaria solicitó a la CIDH prórrogas el 20 de enero, el 1 de marzo y el 19 de abril de 2005 para la presentación de sus observaciones sobre el fondo y la respuesta sobre una posible solución amistosa. La CIDH otorgó prórroga de 30 días en cada ocasión.
67. El 25 de agosto de 2005, la peticionaria presentó observaciones sobre el fondo de la petición y comunicó su interés en el proceso de solución amistosa. El 7 de septiembre de 2005 la CIDH remitió al Estado las observaciones de la peticionaria y le otorgó dos meses para que presentara sus observaciones. El 20 de septiembre la CIDH convocó a la peticionaria y al Estado a una reunión de

⁸⁴ Peritaje de David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión (propuesto por la Comisión Interamericana) rendido a través de fedatario público (affidavit) el 9 de agosto de 2017.

⁸⁵ Peritaje de David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión (propuesto por la Comisión Interamericana) rendido a través de fedatario público (affidavit) el 9 de agosto de 2017.

⁸⁶ Testimonio rendido por Judith Carvajal durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 22 de agosto de 2017.

trabajo el 19 de octubre de 2005 con el fin de abordar asuntos relativos al presente caso. En comunicación del 19 de octubre de 2005, el Estado manifestó su disposición de adelantar el procedimiento de la solución amistosa. Las partes se mantuvieron en discusiones sobre una posible solución amistosa durante casi cuatro años. Mediante comunicación del 13 de mayo de 2009 la peticionaria comunicó a la CIDH la decisión de dar por concluido el proceso de solución amistosa y remitió información adicional⁸⁷. El 14 de mayo de 2009 la Comisión transmitió la información al Estado y le comunicó a la peticionaria y a Colombia que de acuerdo con el artículo 41(4) y (6) de su Reglamento daba por concluida la etapa de búsqueda de una solución amistosa del asunto. En comunicación de 15 de julio de 2009 el Estado presentó observaciones sobre el fondo de la petición, las cuales fueron remitidas a la peticionaria el 26 de octubre de 2009. El 29 de mayo y el 25 de julio de 2013 la CIDH solicitó a la peticionaria información relacionada con el caso, la cual fue aportada por la peticionaria. En comunicación de fecha 22 de agosto de 2013 la Comisión transmitió las partes pertinentes al Estado. El 7 de octubre de 2013 el Estado solicitó a la CIDH una prórroga y el 19 de noviembre aportó información adicional sobre el fondo de la petición, la cual fue remitida el 5 de diciembre de 2013 a la peticionaria. La CIDH adoptó el informe de fondo el 26 de marzo de 2015.

VI. CONCLUSIONES

68. A la fecha, el asesinato del periodista Nelson Carvajal permanece impune, sus familiares no han tenido acceso a la verdad y a la justicia, y los y las periodistas en la región padecen las consecuencias de que un crimen para silenciarlos quede en la impunidad. La CIDH subraya que la impunidad que pesa sobre este tipo de casos produce efectos devastadores para el ejercicio del periodismo local y la libertad de expresión. A casi 20 años de su muerte, la falta de acciones concretas envía un fuerte mensaje inhibitorio y de autocensura a cualquier otro periodista que se enfrenta al poder político y económico regional. Se ha logrado, al fin, sumir a toda una comunidad en la falta de información y de posibilidades de control de la gestión estatal, impidiéndole ejercer su derecho a buscar, recibir y difundir ideas e información.
69. Con base en estas observaciones, la Comisión Interamericana se permite reiterar las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el informe de fondo y la nota de remisión del caso a la Corte, así como en la audiencia pública celebrada los días 22 y 23 de agosto de 2017, en el sentido de que el Estado colombiano ha incurrido en responsabilidad internacional por 1) a violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 13 de la misma en perjuicio de los familiares de Nelson Carvajal Carvajal, 2) la violación de los derechos a la vida y a la libertad de expresión, consagrados en los artículos 4.1 y 13 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Nelson Carvajal Carvajal, 3) la violación de los derechos a la integridad personal y de circulación y residencia consagrados en los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1. de dicho tratado en perjuicio de los familiares de Nelson Carvajal Carvajal. Asimismo, la CIDH reitera las recomendaciones realizadas al Estado en este caso:
 1. Que realice una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer las circunstancias del asesinato de Nelson Carvajal Carvajal y determinar las responsabilidades correspondientes, incluyendo los casos en los cuales dicha actividad implique reabrir investigaciones precluidas o reexaminar causas decididas ante la justicia ordinaria local.
 2. Que adopte todas las medidas necesarias para que en el curso de estas investigaciones y procesos se garantice la seguridad de los familiares de Nelson Carvajal Carvajal y los testigos.

⁸⁷ La peticionaria indicó en relación con la terminación de la etapa de búsqueda de una solución amistosa con el Estado colombiano que consideraba que no se había arribado a ninguna instancia favorable que permitiese el esclarecimiento del crimen o disminuir el grado de impunidad.

3. Que siga adoptando medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de los y las periodistas que se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su oficio, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o que sean originadas en particulares. Especialmente, el Estado debe fortalecer la implementación del “Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades” en beneficio de periodistas de trabajo regional, particularmente quienes ejercen la profesión en zonas rurales del país.

4. Que repare adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material y moral, así como la reivindicación de la labor del señor Nelson Carvajal Carvajal como periodista de un medio local, con especial atención a las consecuencias que la salida del país ha tenido para los familiares de Nelson Carvajal Carvajal.

70. La CIDH no deja de notar, una vez más, la importancia de este caso para el orden público interamericano e invita a la Corte a tomar en consideración estas observaciones al momento de establecer, al igual que otros organismos internacionales *supra*- los estándares aplicables para asegurar que los asesinatos contra periodistas no permanezcan en la impunidad.